

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES Y OMBUDSMAN¹

THE PROTECTION OF THE ELDERLY AND OMBUDSMAN

REMEDIO SÁNCHEZ FERRIZ
Universitat de Valencia

Recibido: 30/06/2015

Aceptado: 18/08/2015

Resumen: el colectivo de los ancianos ha ido aumentando año a año hasta constituir un problema social que el Estado no puede desconocer por su carácter vulnerable. Las transformaciones sociales y en especial la desmembración de la familia contribuyen a crear mayores dificultades de la ancianidad. La Constitución española de 1978 mencionó expresamente el deber de protección pero debe seguir desarrollándose en diversos planos: 1. A través de la sensibilización social, 2. A través de normativa específica que contemple sus problemas concretos, 3. Con el establecimiento de instituciones de protección y, en particular, con la atribución a los Ombudsman de facultades y medios.

Palabras claves: grupos sociales vulnerables. *Ombudsman*.

Abstract: *the elderly have been increasing in number and problems, to become a social problem that States cannot ignore, due to their growing vulnerability. The social transformations, especially in the family ambit, contribute to an increase in the problems of the elderly. The Spanish Constitution of 1978 expressly referred to the public power's obligation to protect them; but that norm should be further developed at various levels: 1. Through social awareness, 2. Through specific legislation that addresses their specific problems, 3. With the establishment of institutions for their protection and, in particular, the allocation of powers and means to the Ombudsman, its being the most appropriate institution.*

Keywords: *vulnerable social groups. Ombudsman.*

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. 1. LA PROTECCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y LEGAL. 2. ¿NORMATIVA ESPECIAL PARA UN OBJETO ESPECIAL? 3. UN DEFENSOR DE LOS ANCIANOS. BIBLIOGRAFÍA.

¹ Este trabajo tiene como base la conferencia pronunciada en el III Congreso Internacional del PRADPI-FIO-PROFIO: Ombudsman y colectivos en situación de vulnerabilidad que, bajo la Dirección de Guillermo Escobar se celebró en la Universidad de Alcalá de Henares durante los días 30 de septiembre a 2 de octubre de 2015.

INTRODUCCIÓN

Ha sido realmente sorprendente para quien escribe esta primera aproximación a la protección de los mayores descubrir tanta bibliografía, tantas webs y tantos documentos de diverso orden (internacionales, estatales y no gubernamentales o derivados de la sociedad civil) que desconocía; pero también he de advertir que tal interés, sin embargo, resulta desconcertante (y tal vez contradictorio) a la vista de tantos casos reales, de abandono y vulnerabilidad, de los que seguro que todos conocemos algún ejemplo.

La complejidad de los problemas que la protección de los mayores comporta y los múltiples enfoques y disciplinas desde los que es necesario afrontarlos exige que concretemos esta reflexión dentro de los límites que una publicación nos marca. Y, siendo así, he creído oportuno que la misma gire en torno al enfoque necesariamente jurídico de la cuestión pero resaltando las dificultades de reconducir al Derecho las complejas situaciones en que puede hallarse este colectivo que se agranda de año en año. En ese terreno en el que el Derecho puede y debe velar (sin ser, en cambio, capaz de precisar, ni menos perfilar ante la diversidad de situaciones en que pueden hallarse los miembros de tan impreciso colectivo que llamamos “los mayores”), es indudable que los *Ombudsmen* pueden desempeñar un papel decisivo y diría que con carácter prioritario, si no exclusivo, a la vista de las formalidades, y de las competencias restringidas y tasadas, en que han de moverse otras instituciones.

Así pues, reflexionare sobre tres aspectos o, mejor, en tres planos diferentes:

I.- La protección desde la perspectiva constitucional y legal. El caso español como excepcional previsión del problema en el propio texto fundamental. Necesidad de contemplar legalmente los problemas específicos de los mayores, por serlo.

II.- La dificultad de encaje de la muy necesitada previsión legal cualquiera que sea el país a que nos refiramos. Determinación en normas específicas de un objeto normativo difícil de precisar (“mutante”).

III.- La importancia de la figura del Defensor del Pueblo y su especial adecuación para la extraordinaria complejidad del conjunto social a que nos referimos.

1. LA PROTECCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La Historia de los derechos humanos es una sucesión de compromisos adquiridos respecto de concretas (las más graves) necesidades que han generado ampliaciones sucesivas del ámbito de la libertad, de la igualdad y de la dignidad. Este triple y “sucesivo” eje en torno al cual se ha ido consolidando la cultura o el mundo de los derechos (la lengua de los derechos, diría García de Enterría) es el núcleo sin el cual todo esfuerzo hubiera sido baldío; de suerte que otros conceptos como la proporcionalidad, discriminación, o indivisibilidad de los derechos no

son sino técnicas con las que se ha ido amparando y apuntalando tal ampliación sucesiva del ámbito de dichos valores hasta su formulación (integrada) más acabada de lo que el art. 10.1 de nuestra Constitución considera el libre desarrollo de la personalidad.

Si bien esta expresión constitucional resulta más apropiada (o estamos más habituados a referirla) para los niños y/o jóvenes (colectivos también expresamente contemplados en el Cap. III del Tit. I CE y en los documentos internacionales) no es menos cierto que tendremos que ir mentalizándonos sobre la necesidad de reivindicarla también para los mayores que, no por serlo, dejan de necesitar tal libertad de seguir desarrollando su vida y su personalidad dentro de los límites que la salud y la natural merma física les vayan marcando. En la medida en que el colectivo de mayores, sobre ampliarse en número, aumenta sus problemas y requiere de soluciones nuevas, se sitúa en ese ámbito de mayor necesidad a que acabo de aludir y que históricamente ha ido generando técnicas y soluciones nuevas para problemas sobrevenidos.

1.1. Universalidad de los derechos

1.- Sentados los principios-valores que constituyen el fundamento de los derechos en general, ha de recordarse también, al objeto de centrar esta reflexión, algún elemento constitutivo de la naturaleza de los derechos humanos cual es su carácter universal; en primer lugar porque se ha de partir de él y, en segundo lugar porque desechamos ya de entrada el enfoque que tiende a enumerar derechos de los mayores que no son sino los de todos y, por consiguiente nada aportan a la resolución de sus problemas; porque de tal carácter universal hemos de partir al referirnos a la protección de los mayores. Todos los seres humanos son titulares de los derechos que, por ello, llamamos humanos. O, dicho de otro modo, los derechos humanos, como por su parte ocurre también con los fundamentales, lo son porque son universales. La universalidad no es una técnica como las que se acaban de aludir, ni es un valor fundamentador de los derechos como los también mencionados como tres grandes pilares del sistema de derechos humanos (y del constitucionalismo). La universalidad es condición *sine qua non* de la naturaleza del derecho humano que lo es si no distingue entre categorías de titulares.

Y siendo así, nada habría que decir de la especial protección de los mayores que, por tanto, gozarían del reconocimiento general de los derechos, de los humanos en el ámbito internacional, y de los fundamentales en el concreto ordenamiento al que pertenecen y, en nuestro caso, en el ordenamiento constitucional español que, por lo demás, puede presumir de un alto nivel de protección general y de haber introducido en el Cap III del Tit. I CE un precepto desconocido en nuestro entorno político cultural, y expresamente referido a los mayores, al disponer su art. 50 que:

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares,

promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

De una primera lectura del texto constitucional habríamos de concluir que poco cabe añadir al compromiso adquirido por los poderes públicos (en realidad impuesto a los mismos por la Constitución). Todo parece haberse previsto, pero es bien sabido que la realidad es mucho más compleja tanto por la progresiva ampliación de facetas derivadas del reconocimiento genérico de la protección del art. 50 de la Constitución, como por la condición del Estado español, al ser un Estado social y, además, descentralizado.

Antes, sin embargo, de poner de relieve esa doble complejidad de la normativa objeto de estudio con referencia a las personas mayores, para resaltar esta alusión al trecho extraordinario que existe entre el ser y el deber ser en el caso de este colectivo social vale la pena que nos detengamos un momento. Creo que el Manifiesto de la Mesa Estatal por los derechos de las Personas Mayores ofrece una síntesis bien clara de la situación real que cabe recordar en torno a las siguientes realidades: siendo las personas mayores contribuyentes decisivas en el mantenimiento de las familias y de la sociedad en general (cuidando de los dependientes y de los nietos –condición que permite la incorporación de las mujeres jóvenes al trabajo-, etc.) sus valiosas aportaciones carecen, sin embargo, de todo reconocimiento² y cuando no pueden ya continuar se convierten en un colectivo invisible cuya discriminación y/u olvido es tolerada y cuyos abusos y atropellos carecen de medios específicos de protección³. Más aún, como advierte Blázquez⁴, hoy se asocia vejez a efectos negativos de ellos pero también para la sociedad y el FMI ha llegado a calificar la mayor longevidad de la población como “riesgo financiero”⁵.

² Ello, incluso sin referirnos a sus valores culturales. Ciceron, escribe en *De senectute*: “Nada prueban quienes afirman que la vejez no se desenvuelve en los negocios. Es como decir que el timonel no hace nada sujetando el timón, puesto que mientras él permanece sentado en popa, unos se encaraman en los mástiles, otros corren de aquí para allá, otros queman los desechos. Es verdad que no hace el trabajo que hacen los jóvenes, sin embargo el timonel hace cosas mejores y de más responsabilidad. Trabajo que no se realiza con la fuerza, velocidad o con la agilidad de su cuerpo, sino con el conocimiento, la competencia y autoridad. De ningún modo la vejez carece de estas cualidades, por el contrario éstas aumentan con los años, a menos que os parezca que yo haya puesto fin a mi actividad porque no participo en ninguna guerra”.... MARCO TULIO CICERÓN: *De Senectute*, Editorial Triacastela, Madrid, 2001. texto extraído de la reseña de DELICADO MENDEZ, Rosario, pág. 11, en <http://es.scribd.com/doc/38496471/Ciceron-Marco-Tulio-De-La-Vejez-bilingue#scribd>.

³ Digo medios porque sin perjuicio del respeto a la petición del mencionado Manifiesto, (una Convención de UN) creo que lo que se debe solicitar son instituciones.

⁴ BLÁZQUEZ MARTÍN, Diego Los derechos (humanos) de las personas mayores, en *Los derechos de las personas mayores: perspectivas sociales, jurídicas, políticas y filosóficas* / coord. por Diego Blázquez Martín, 2007, pág. 25.

⁵ La gente mayor esta arrinconada, en *Cartas de lectores*. El Periódico, <http://www.elperiodico.com/es/cartas/entre-todos/gente-mayor-esta-arrinconada/1160>.

En efecto, la cuestión hoy a mi juicio no es tanto de carencia de normativa, ni de que no se les reconozcan constitucional y legalmente los derechos de toda persona, sino de ausencia de instrumentos y/o técnicas puestas a disposición de los mayores o de quienes les representan e, incluso, y sobre todo, de instituciones que puedan controlar a quienes les representan cuando la capacidad del mayor se halla disminuida. No es de extrañar que sorprenda este nuevo problema, como en su día lo hizo la concreta reivindicación de especialidades normativas que ha llevado a la protección de los menores, de las mujeres, de los discapacitados, etc.

1.2. La normativa vigente hoy y su complejidad

1.2.1. Respecto de la primera razón de complejidad aludida, también ha de considerarse compartida con el resto de titulares o personas y de sus derechos

A medida que afortunadamente avanzamos en el movimiento constitucional los derechos se hacen más complejos porque se trata de hacerlos más reales, efectivos y diversos en la medida en que la vida y las sociedades se hacen más diversificadas, plurales, complejas pero también técnicamente más avanzadas. Por tanto, tampoco en esto los mayores tendrían que ser una excepción. Bien al contrario, en ellos reside la ocasión para probar la eficacia real de los derechos: Si en la generación que ha visto desarrollarse la cultura de los derechos, que ha luchado por los derechos de la mujer, del menor, de los grupos vulnerables... el sistema no es capaz de reaccionar ante el nuevo problema, es que no se ha instalado debidamente tal cultura de los derechos.

El problema es que, como ocurrió en la reivindicación de la protección para otros grupos vulnerables, se requiere de tiempo y de acciones de todo tipo que despierten las conciencias ante esta realidad que parece operar cierta desconexión “de los derechos” en el momento final de la vida pública o laboral cuando tal desconexión solo debe producirse con el final de la vida. Por ello, “tan necesarios como los instrumentos de técnica jurídica es construir una conciencia moral en todos los miembros de la sociedad...”⁶.

1.2.2 Relectura del texto del artículo 50 CE

En efecto, la Constitución española fue novedosa al prever en forma expresa la protección de los mayores aunque, aparentemente, se limitó a configurar el derecho de los mayores a la suficiencia económica, mediante un sistema de pensiones adecuado, y la previsión del derecho al bienestar a través de la atención de los servicios sociales que habrían de atender sus necesidades específicas de salud, vivienda, cultura y ocio. Del mismo, por ello, se han deducido dos mandatos

⁶ BLÁZQUEZ MARTÍN, Diego Los derechos (humanos)... ya cit., pág. 34.

constitucionales de los que derivan derechos sociales en favor de los mayores⁷; pero a mi juicio el texto del artículo se halla enriquecido por algún otro elemento que tal vez ha pasado inadvertido y al que ahora me he de referir.

Hay quien considera que la previsión constitucional es obsoleta ante la complejidad del problema 40 años después⁸ de su entrada en vigor; pero ello no permite ni negar que un precepto como el que se comenta pudo considerarse el vértice de todos los logros sociales, ni desconocer su potencialidad por cuanto dicho texto sigue hoy señalando las dos vías por las que ha de ser desarrollado sin seguir desconociendo que el mismo determina un doble ámbito de actuación: el familiar, que da por supuesto (“...con independencia de las obligaciones familiares”) y el de los servicios sociales que atenderán sus “problemas específicos” y no solo los generales que comparten con otros grupos vulnerables.

A mi juicio, pues, este precepto no ha devenido obsoleto sino que ha de extraerse del mismo una aplicación real y efectiva de toda su potencialidad y, para ello, el primer paso ha de ser el reconocimiento del problema familiar y social que hoy representa la debida atención de los mayores en sus años de mayor vulnerabilidad y en situaciones familiares que distan mucho de ser el tradicional refugio de todo problema de vulnerabilidad. Este es, justamente, el problema; si la Constitución da por supuesto la existencia y operatividad del “refugio” familiar, no cabe negar el cambio extraordinario que la familia, y por ende la sociedad, ha sufrido convirtiendo en difícil tarea las palabras de Cicerón:

“el peso de la edad es más leve para el que se siente respetado y amado por los jóvenes “...

“.... La ancianidad es llevadera si se defiende a sí misma, si conserva su derecho, si no está sometida a nadie, si hasta su último momento el anciano *es respetado entre los suyos*”.

Hoy la desestructuración familiar, la educación más tecnológica que humanista, la velocidad que la vida activa impone a las vidas de los aun “activos”, la competitividad con que han de formarse nuestros hijos y nietos, no deja espacio para recordar siquiera que también son parte de la familia los más mayores, los que nos proporcionaron todo aquello de que disponemos ya sea material, espiritual o social. El viejo hoy, sin embargo, contrasta con el modo de vida vigente. “El tiempo del viejo, dice Bobbio⁹, es el pasado que revive en la memoria... El viejo

⁷ Cfr. HERREROS LOPEZ, Manuel. Personas mayores, en ESCOBAR ROCA, Guillermo, Derechos Sociales y Tutela Antidiscriminatoria. Pamplona, Aranzadi, 2012, pág. 1911.

⁸ ¿Podía imaginar el constituyente, por ejemplo, que en situación de crisis serían los abuelos mano de obra gratuita para sus hijos e incluso que tuvieran que sostener las familias de sus hijos con sus pensiones a veces magras? ¿Y puede el art. 50 resolver problemas de olvido (familiar y social) cuando no de abandono o desamparo de quienes ya no se hallan en condiciones físicas o mentales de seguir siendo el sostén familiar? Tampoco es esa, sin duda la función de una Constitución...

⁹ BOBBIO, Norberto, De senectute y otros escritos autobiográficos. Madrid, Taurus, 1996, pág. 72.

vive de recuerdos y para los recuerdos pero su memoria se debilita cada día...”. Me pregunto si seremos capaces de transmitir a los jóvenes de hoy el respeto por el pasado o si seguiremos adiestrándolos para una (despiadada a veces) competición entre sus iguales que pronto, como ellos, deberán ser desplazados por los ahora niños. En su carta a los ancianos decía Juan Pablo II: “Ellos son depositarios de la memoria colectiva y, por eso, intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la convivencia social. Excluirlos es como rechazar el pasado, en el cual hunde sus raíces el presente, en nombre de una modernidad sin memoria”... ¹⁰. En definitiva, me permito concluir, los mayores son parte, y muy importante de la misma sociedad que tiene el problema y que, por consiguiente, ha de hallar vías de reconducción que no resulten excluyentes de un colectivo del que somos deudores.

La cuestión, por consiguiente, ha de enfocarse desde el texto constitucional pero procediendo a una lectura integral del mismo que presupone la concurrencia de dos ámbitos amplios y concurrentes en los que se han de desarrollar acciones públicas y también privadas centradas en el ámbito familiar; no es, por tanto, la exigencia de prestaciones públicas lo único que cabe deducir del artículo 50; también hay una llamada de atención al ámbito familiar e indirectamente, a los poderes públicos que habrían de contemplar la familia, también, como ámbito en el que se ha de desenvolver la persona mayor con sus especiales circunstancias; si en este ámbito familiar ha de fomentarse, a la par que en la escuela, el mantenimiento de los valores y la cultura de los derechos humanos (que en tal ámbito se refuerzan con el afecto y la gratitud), no menos decisiva será también la actuación de los poderes públicos respecto de la familia que tenga en su seno y a su cuidado ancianos. La cuestión no es baladí ni excede del ámbito jurídico político, por más que pueda contener elementos éticos. Piénsese por ejemplo en el soporte financiero

¹⁰ La autora es consciente de que esta cita haya llamado la atención de uno de los evaluadores. Sin embargo, la mantiene en la medida en que en esta publicación se está subrayando el valor del texto constitucional al tiempo que se pone de relieve que, lejos de hallarse obsoleto, su virtualidad apenas se ha realizado en la práctica porque antes de que ello pueda ser realidad ha de pasarse por una mentalización (o, como se dice ahora, visibilidad) del problema. Lo que significa que, como antes ocurrió con la protección de otros colectivos como menores o mujeres, se requiere de una concienciación social de la existencia del problema y de sus dimensiones que en el presente caso supera sin lugar a dudas las hipotéticas previsiones de hace unas décadas. Y en esa labor, que ha de ser un proceso lento, considero tan oportuna la referencia a la Carta de Juan Pablo II a los ancianos como el Manifiesto civil antes citado o cualesquiera documentos de relevancia social que peldaño a peldaño van acercándonos a la consideración social y política de un problema cuya principal dificultad hoy es el reconocimiento de que, por existir, hemos de hallar las fórmulas que hagan posible la genérica previsión constitucional del art. 50 CE a las multiformes situaciones que se nos plantean en torno a los problemas específicos de la ancianidad en una sociedad que ha evolucionado y cambiado extraordinariamente uno de los ámbitos sociales en que se apoyaba el texto fundamental en 1978, el familiar, y que, por consiguiente, ha de asumir ahora, como sociedad, las funciones que no siempre ni en la mayoría de los casos se pueden seguir cumpliendo en la familia a no ser que ésta cuente con el soporte social apropiado.

necesario y/o las ayudas fiscales que han de considerarse en tal sentido una de las aplicaciones del art. 50 CE, ya transcrito, y a mi juicio aun no desarrollado suficientemente¹¹.

1.2.3. Complejidad derivada de la descentralización normativa

En segundo lugar, en nuestro caso, como en tantos otros países descentralizados, la complejidad de la protección (o mejor del estudio de la normativa de protección) también deriva de la distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas que en términos generales ha dejado en manos de éstas la realización de las políticas sociales. De ahí que se disperse entre las distintas CCAA aunque no deban existir grandes diferencias materiales en cuanto a contenidos¹² pero sí, obviamente, afectan a sus correspondientes titulares en la medida en que un supuesto desplazamiento territorial comporta el cambio de normativa de aplicación

Este aspecto “autonómico” de la protección¹³ ha sido estudiado, a mi juicio con acierto, por Durán¹⁴ de cuyas reflexiones llamo aquí la atención sobre dos cuestiones que considero más relevantes:

En primer lugar, el hecho de que los mayores apenas sean objeto de consideración normativa en forma aislada sino que debe extraerse la misma de su inclusión en grupos más amplios en los que se suelen contemplar junto a disminuidos, menores, etc. Este libro a que me estoy refiriendo, coordinado por Balaguer Callejón, es un ejemplo de estudio exhaustivo de los derechos, principios y objetivos comprendidos en el Cap. III CE y desarrollados ampliamente por los Estatutos de última generación. Sin embargo, a los mayores se les dedican algunas páginas al tiempo que otros grupos vulnerables como menores y jóvenes, cuando

¹¹ Resulta ilustrativa a este respecto una reclamación presentada al Defensor del Pueblo de la que da cuenta el informe de 2014: Se recibió una queja presentada por los familiares de una anciana de 97 años de edad, que padecía alzhéimer, y que necesitaba una atención personal las 24 horas del día, por lo cual había tenido que contratar a dos empleadas de hogar y abonar dos cotizaciones mensuales a la Seguridad Social, sin poder aplicar deducción alguna a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

¹² En el informe 2014 de la Defensora del Pueblo se refiere una interesante intervención: con ocasión de una queja sobre la consideración de la movilidad reducida en la valoración de discapacidad realizada a una persona con déficit visual grave, tras asegurar que existen notables diferencias en el criterio aplicado en distintas Comunidades Autónomas. Se formuló al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) una Recomendación para que se adopten las medidas oportunas para agilizar los trabajos y promover nuevo Baremo de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, habiendo logrado el compromiso del IMSERSO en tal sentido.

¹³ En particular sobre la distribución de competencias entre Estado y CCAA en materia de pensiones, HERREROS LOPEZ, Manuel. Personas mayores, ya cit., págs. 1915 y ss.

¹⁴ DURÁN RUIZ, Fco. Javier, Derechos y principios relacionados con las personas mayores, las menores de edad y la integración de la juventud, en Reformas estatutarias y declaraciones de derechos / coord. por Francisco BALAGUER CALLEJÓN y otros. 2008, págs. 440 y ss.

su problemática difiere ampliamente y comprende muchos aspectos complejos. Curiosamente, el estudio es riguroso pues, pese al aparente descuido en lo referido a los mayores, no hace otra cosa sino responder a una realidad normativa: la referencia expresa de los Estatutos de Autonomía que acumulan tan diferentes situaciones¹⁵, siendo que, como el propio Duran advierte, el grupo de los mayores es el más necesitado de protección.

En segundo lugar, del estudio referido al ámbito autonómico español también cabe destacar el interés del debate doctrinal generado en torno a la naturaleza y efectos de los derechos estatutarios, suscitado a raíz de la inclusión de detalladas tablas de derechos en los Estatutos reformados a partir de 2006, básicamente en el Estatuto catalán y en el andaluz. Esta segunda cuestión doctrinal puede muy bien ser obviada en la presente ocasión sin perjuicio del interés que puede tener el desarrollo legislativo de los dos Estatutos mencionados a partir del minucioso detalle de las competencias en las que (sin duda, más por el momento social en que se redactan que por razones doctrinales)¹⁶ ya se contemplan facultades (competencias y/o funciones) directamente relacionadas con los mayores y su especial problemática.

Un ejemplo de ello sería la previsión específica que sobre los mayores realiza el art. 40.6 del Estatuto de Cataluña¹⁷, o ya con anterioridad, las Leyes catalanas de acogida de personas mayores (Ley 22/2000, de 29 de diciembre), o sobre el testamento vital o declaración de voluntades (Ley 22 de diciembre de 2000) en las que la normativa autonómica fue pionera ante la ausencia de normativa estatal. Resulta curioso que estas leyes fueran anteriores al movimiento reformador de los Estatutos que, concretamente en Cataluña, dio lugar al aludido debate; como también lo fueron los dos casos en que sí se regula en forma específica la situación del mayor: Ley andaluza 6/1999, de 6 de julio, de atención y protección de las personas mayores y la Ley castellano leonesa 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León.

1.2.4. Ausencia de especialización también en normativa estatal

Pues bien, la naturaleza social del Estado español, sin perjuicio de la decidida colaboración de las entidades autónomas en su realización, también impregna la

¹⁵ En lo que se refiere al ordenamiento valenciano ya me pronuncié sobre esta misma práctica en SÁNCHEZ FERRIZ Remedio Acotaciones sobre la Carta Valenciana de los Derechos Sociales prevista en el Estatuto de 2006, en *Revista valenciana d'estudis autonòmics*, N° 56, 2011.

¹⁶ Me refiero a 2006-2008, años de expansión de los derechos y de largueza económica en los que la cultura de las políticas sociales se ha desarrollado ya extraordinariamente respecto del año de redacción de la Constitución.

¹⁷ Art. 40 EC (bajo el epígrafe “Protección de las personas y de las familias”, establece en su pfo. 6 “Los poderes públicos deben garantizar la protección de las personas mayores para que puedan llevar una vida digna e independiente y participar en la vida social y cultural. También deben procurar la plena integración de las personas mayores en la sociedad mediante políticas públicas basadas en el principio de solidaridad intergeneracional”.

legislación estatal, como no podía ser de otro modo y, en ella, podemos observar lo mismo ya referido respecto de la normativa autonómica: la falta de previsiones específicas para los mayores (salvo las excepciones mencionadas) que quedan envueltos en las referidas a otros grupos vulnerables.

1.3 Algún ejemplo de legislación estatal que indirectamente afecta a los ancianos

Lo cual no deja de ser lógico hasta el momento en que un grupo concreto de los insertos entre los vulnerables adquiere tales proporciones o tales peculiaridades que le hace acreedor de un tratamiento específico para lo cual, como siempre ha sucedido en la historia de los derechos, ha de madurar antes la convicción social de los problemas, el sentir sobre las necesidades a las que, solo retardadamente, suelen darse soluciones; el ejemplo de los derechos (en realidad de la igualdad) de la mujer es bien significativo:...del más absoluto desconocimiento a haber llegado a ocupar importantes cuotas de representación en órganos constitucionales ha discurrido un proceso bien largo¹⁸.

Por su parte, la legislación general del Estado ha desarrollado tales previsiones “generalistas” (no concretadas en las peculiaridades de los ancianos) aunque hayan sido las Comunidades Autónomas las que, como ejecutoras del Estado Social, han aprobado diversas normas que incorporan a nuestro ordenamiento jurídico algunos derechos destinados, entre otros, a las personas mayores en el marco de la protección por parte de la Administración y, en particular, de los conocidos como Servicios Sociales.

Sin embargo, creo que tiene mayor interés la legislación estatal a la hora de plantear la protección de los mayores en situaciones de desamparo dentro de la propia familia. En este sentido, cabe destacar los siguientes ámbitos de protección:

A) **El derecho a la protección personal y patrimonial.** A través de diversas normas de carácter estatal, el legislador ha ido desarrollando el principio tuitivo

¹⁸ La condición social de nuestro Estado surte como se sabe efectos directos también en el desarrollo de las campañas electorales en las que la legitimidad de la eficacia actúa como telón de fondo aunque abiertamente no se reconozca; tampoco desde esta perspectiva parece haber generado aun una especial atención buen número de sus electores, cada vez más creciente como son los mayores. Se diría que la invisibilidad que caracteriza a este sector de la población alcanza incluso a los partidos políticos que, con ello, renuncian a su característica de *catchs all*; cabe esperar que también la mentalización llegue al punto de atención que sí han alcanzado las mujeres para el mundo político aunque la situación de los mayores también juegue en desventaja por tratarse de “clientes” o electores “perecederos” y tal vez por ello de menor valor para los partidos políticos. También, por tanto, desde esta perspectiva si no todo, hay mucho por hacer. Sin embargo, y mientras es susceptible de ser mercancía, la vejez es objeto de atención de la sociedad de consumo a través de la TV y tantas formas de publicidad. “... En una sociedad donde todo se compra y se vende, también la vejez puede convertirse en una mercancía como las demás... objeto de lisonjas, con imágenes agradables... (BOBBIO, De Senectute, ya cit. pág. 35).

constitucional en torno a lo que podríamos identificar como derecho genérico a la protección de las personas con discapacidad y de las personas mayores, que se encuentra en disposiciones como el Código Civil¹⁹, referidas a la incapacitación de las personas, la acogida familiar y las figuras de la tutela y la curatela, la Ley 41/2003²⁰, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad. La Ley 42/2003²¹, de 21 de noviembre, que protege a los mayores dentro de la estructura familiar, impidiendo las restricciones sin justa causa de las comunicaciones entre abuelos y nietos.

Sin duda las más significativas de las previsiones estatales se contienen en el Código Penal, que tipifica el maltrato a los mayores dentro de los delitos de violencia doméstica, aunque, como advierte Martínez Maroto²² la principal dificultad de estos supuestos reside en la prueba que entraña grandes dificultades²³. Además, el maltrato económico está recogido en su doble vertiente de delito y falta, y específicamente determinado en razón de su cuantía. El abandono de ascendientes²⁴ y la falta o privación de los cuidados necesarios, así como las faltas

¹⁹ Artículo 200 y sgts. del Código Civil. Un riguroso estudio sobre dichos preceptos y su concreta aplicación a la ancianidad: GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen y NAVAS NAVARRO, Susana, La situación jurídica de las personas mayores en Los derechos de las personas mayores : perspectivas sociales, jurídicas, políticas y filosóficas / coord. por Diego Blázquez Martín, 2007, págs. 37-70.

²⁰ Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. Prevé la posibilidad de constituir un patrimonio especialmente protegido para una persona, mayor o no, con discapacidad, el establecimiento de un régimen de autotutela en previsión de una futura discapacidad y la incapacidad de suceder de aquellos interesados que no hayan prestado las atenciones debidas al testador.

²¹ El artículo 160 del Código civil, tras la modificación operada por Ley 42/2003, de 21 de noviembre,

²² Martínez Maroto, A. Malos tratos y personas mayores. Un enfoque jurídico. Revista Española de Geriátría y Gerontología 2003:38 (3), pág. 129. Pero no cabe negar que, en su opinión “el maltrato físico está suficientemente desarrollado en el Código Penal. A lo largo de su articulado existen delitos y faltas contra la integridad física dentro de las cuales están perfectamente tipificadas las acciones u omisiones constitutivas de maltrato físico. El maltrato psicológico ha entrado a formar parte del Código Penal dentro de la última de las reformas habidas, y está recogido expresamente en el artículo 153 del referenciado texto legal (“el que habitualmente ejerciere violencia psíquica sobre...ascendientes o incapaces que con él convivan o se hallen sujetos a su tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho...”).

²³ Artículo 173 (“De las torturas y otros delitos contra la integridad moral”), pfo. 2 (redactado por el número noventa y dos del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo), con vigencia desde 1 julio 2015): El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores... será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años...

²⁴ Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial

de respeto, tienen también su tipificación específica y referida a los ascendientes. (...) se puede observar que no es tan ajeno y tan disparejo el concierto legal del resto de los puntos de vista desde los que se puede contemplar el maltrato; por supuesto, con independencia de las medidas preventivas y de los planes de intervención, el recurso de la coercibilidad está siempre presente como forma clara y contundente de frenar y disuadir a los maltratadores.²⁵

B) El derecho a ser atendido en situación de dependencia. Se trata de un derecho de reciente instauración en el nivel estatal (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) que se incardina en nuestro sistema de servicios sociales.

C) El derecho a un entorno accesible. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad es una Ley que no está destinada al colectivo de mayores sino al de personas con discapacidad....

D) El derecho a la atención sociosanitaria. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud considera esta atención como el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social.

Obsérvese que ninguno de los enumerados son derechos propios o específicos de los ancianos sino que los adquieren a medida que por su debilitación física o mental van incorporándose a los supuestos concretos de vulnerabilidad que cada una de las leyes mencionadas regulan y protegen. Si acaso, debería considerarse la especial situación en que se encuentran al pasar de la doble situación supra aludida: de colaboradores activos en las cargas familiares (según se ha dicho ya, absolutamente ignorados) a constituir una carga familiar merecedora de atención sin que, en esta segunda situación, deba privárseles de su capacidad de obrar salvo en los casos más graves. La lectura constitucional de su peculiaridad debería subrayar la coexistencia del componente público (como conjunto de derechos que obligan a los poderes públicos) con el privado que se desarrolla en el ámbito familiar²⁶.

En todo caso, la enumeración de derechos podremos hacerla tan larga como se quiera²⁷ pero ello no contribuirá a una mejora real de la vida ni del reconocimiento

protección: artículo 226: 1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses...

²⁵ MARTÍNEZ MAROTO, A. Malos tratos y personas mayores..., ya cit., pág. 131.

²⁶ GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen y NAVAS NAVARRO, Susana, La situación jurídica..., ya cit., pág. 47.

²⁷ El caso de la mencionada Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León me parece paradigmático por exceso en la enumeración de cuantos

de los problemas de los ancianos. A ello me refería cuando afirmé que el carácter universal de los derechos se da por supuesto y no parece que la permanente enumeración de ellos para cada colectivo vulnerable este dando resultados efectivos. Creo que, si acaso, lo que sí ha de introducirse es, junto a instituciones “activas” en este campo, alguna variable en la interpretación normativa. En este sentido, sin perjuicio de cuantas ideas y técnicas se aportan desde otras disciplinas²⁸, desde la perspectiva jurídica creo que debe releerse la triple fundamentación del Estado constitucional con que hemos comenzado (libertad, igualdad y dignidad del ser humano), para poder centrar los problemas de la ancianidad en torno a este último pilar: pues la dignidad del ser humano ha de alcanzarle hasta la muerte cualesquiera sean las condiciones en que se halle. Y aquí sí, cabe afirmar que la situación en que muchos ancianos se hallan, dentro y fuera de la familia, dista de ser propia de la predicada dignidad.

2. ¿NORMATIVA ESPECIAL PARA UN ÁMBITO SUBJETIVO ESPECIAL?

2.1. Necesidad de normativa especial

La determinación normativa que proceda a una mayor especialización en la problemática propia de los mayores es lógicamente deseable, y necesaria para las instituciones que han de aplicarla en forma más directa, del mismo modo que en otros colectivos vulnerables ha permitido su mejor protección²⁹. Me detendré en ello no sin antes poner de relieve la especial opacidad de la realidad presente que viven muchos mayores de la que pondré algún ejemplo directamente vivido

derechos se podrían atribuir a los mayores o a cualquier otra persona, lo que no considero una técnica conveniente por más que no cabe negar la completitud de la regulación que prevé todas las posibilidades reales que pueden presentarse a los mayores. Lo mismo cabría decir de la homologa andaluza aunque esta no haya llegado a enumerar tan exhaustiva mención de los derechos.

²⁸ Por todos, se realiza un detallado estudio sobre los comportamientos y técnicas de aplicación, en LETURIA ARRÁZOLA, Francisco Javier, Los derechos de las personas mayores, en *Oñati socio-legal series*, Vol. 1, n.º. 8, 2011 (Ejemplar dedicado a: Ancianidad, Derechos Humanos y calidad de vida: Una cita entre generaciones, un desafío de este tiempo / coord. por María Isolina Dabove Caramute, Eduardo Víctor Lapenta), 24 págs. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3871822>

²⁹ Tras el reconocimiento general de los derechos había de imponerse, como pedía BOBBIO (Derechos del hombre y Filosofía de la Historia, en *Anuario de Derechos Humanos*, núm. 5, págs. 27 y ss), un proceso de especificación o especialización. Lo que, por lo demás, se halla en la base de la debida comprensión de los derechos que conlleva la clasificación que siempre me ha parecido más acertada por su claridad y sencillez. Me refiero a la tradicional clasificación de Schmitt que se refería a los derechos “del hombre situado”, lo que en definitiva ocurre cuando nos referimos a cualquiera de los grupos sociales vulnerables para los que, no en vano, reivindicamos derechos precisamente por su especial situación que, si no los aparta de la generalidad, si los hace más necesitados y merecedores de especiales medidas y atenciones.

por mí en la preparación de la presente intervención: En la web del *Sindic de Greuges* de la Comunidad Valenciana busco en materias y, pese al amplio menú que se despliega, no hay ninguna referida a ancianos. Cuando en búsqueda libre se escribe tal término aparecen 4 resultados referidos a 1 queja fechada en 2004, 2 en 2006 y 1 en 2007 (todas ellas sobre percepción de ayudas por la familia del anciano). Tratando de precisar algo más, se elige entre las materias “atención a la dependencia” y en término de búsqueda se escribe “anciano” y el resultado es 0. Y, ello no obstante, en la prensa de este mes de septiembre han sido publicadas algunas noticias preocupantes (y escandalosas) en torno a abusos cometidos sobre ancianos³⁰ y sobre los que parecen existir bandas organizadas.

Por consiguiente, se requiere de normativa específica pero también, y sobre todo, de dar visibilidad a un problema de gran envergadura y sobre el que aún no se ha producido el movimiento social y cultural que afortunadamente sí se ha generado desde décadas atrás sobre la situación de la mujer y sobre la vulnerabilidad de los menores.

2.2. Información y concienciación para lograr la visibilidad del problema

Tal vez por ello, contando ya con técnicas aplicadas a otros colectivos vulnerables, como los que se acaba de mencionar, en concreto para el colectivo de los mayores la especialización debería ir dirigida, más a lograr apoyo institucional y a establecer técnicas de análisis y protección, que a la formulación de consideraciones doctrinales³¹. En realidad, la normativa específica requerirá aún de una primera fase de concienciación social sobre la gravedad de un problema que a todos nos afecta. La Carta francesa (1999) de los derechos y las libertades de la persona de edad dependiente en su art. XIV lo expresa, a mi juicio, con claridad:

³⁰ EL MUNDO 13/09/2015 dedica toda 1 página bajo este titular: El Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha difundido un informe donde advierte del aumento de casos de abuso de los cuidadores no profesionales que, contratados por la familia para atender a una persona mayor, en muchos casos dependiente, resultan ser estafadores o delincuentes muy peligrosos.... EL MUNDO 21/09/2015, también dedica 1 página al siguiente tema: Fiscalía detecta una red que retiene a ancianos hasta vaciar sus cuentas.... Ello no obstante, no he sido capaz de encontrar referencia alguna en la web del Sindic.

En todo caso, este tipo de noticias es recurrente. Por ejem. LA VANGUARDIA publicaba el 13/06/2015 una noticia con el siguiente titular: Un millar de denuncias por malos tratos a personas mayores en Catalunya en 2015... Los Mossos d'Esquadra han detenido a 208 personas en lo que va de año por estos casos.

³¹ 31 Aunque hasta tal punto es importante emprender el proceso de “visualización” o “visibilidad” de este colectivo que llama la atención en la Carta francesa (1999) de los derechos y las libertades de la persona de edad dependiente su art. XII que, bajo el epígrafe de “la investigación, una prioridad y un deber”, subraya la importancia de la investigación multidisciplinar que tienda a facilitar la mayor calidad de vida posible. Tal vez el mejor complemento de tal disposición es el art. último (XIV) de la misma Carta en el que se invoca la información como el mejor medio de lucha contra la exclusión.

“El conjunto de la población debe ser informado de las dificultades en que se hallan las personas de edad dependientes. Tal información debe ser lo más amplia posible. La ignorancia conduce a menudo a una exclusión que no tiene en cuenta las capacidades de que aun dispone ni los deseos de la persona.... Cuando sea aceptado por todos que las personas ancianas dependientes tienen derecho al respeto absoluto de sus libertades de adulto y de su dignidad de ser humano, esta Carta será aplicada en su espíritu”³².

2.3 Dificultad de predeterminar el objeto de aplicación

Cierto que este documento que acabo de mencionar se refiere a ancianos que, además, sean dependientes; pero lo mismo cabría decir de todos los ancianos. Pues va a ser muy difícil determinar el objeto de protección que por fuerza ha de ser amplio, en el que se establezcan los fines a lograr (de modo semejante a la invocación del “interés del menor”, deberíamos hablar del respeto a la “dignidad del anciano”); no tanto porque haya entre los mayores el “subcolectivo” de los más ancianos, que también, sino por la *mutabilidad* de las circunstancias psicofísicas en que viven los mayores. De manera que la normativa específica debiera prever cierto “escalonamiento” de las diversas situaciones en que los ancianos se van hallando con el paso del tiempo y el empeoramiento de su salud. Me explico:

Así como la normativa sobre menores, en su aplicación a cada menor “decae” con el cumplimiento de la mayoría de edad, y la de aplicación a los discapacitados, por el contrario, comporta en general cierta estabilidad (a salvo de concretos supuestos de recuperación), en el caso de las personas mayores ha de preverse una sucesión de supuestos por los que, previsiblemente y por la propia naturaleza de las cosas, se presentan en el espacio temporal que transcurre desde la jubilación hasta la muerte. Por ello, la precisión del objeto jurídico, propia de toda *lex certa*, también ha de comportar cierta complejidad, por lo que debería afianzarse más en torno a valores y fines (a los que ya se ha referido la escasa documentación internacional existente) que habrán de tener siempre como referente axial, según ya he mencionado, *la dignidad del ser humano*.

2.4. Desarrollo normativo tendente a respetar la dignidad del anciano

Advertida la dificultad de precisar las condiciones (físicas y psíquicas) tan variables en que se puede hallar la persona anciana, la regulación de su protección debería resaltar la significación social del problema y los deberes de terceros

³² La idea no pasa desapercibida en las dos leyes autonómicas que vengo citando. Así, entre los objetivos de la ley andaluza se señala el de “Sensibilizar a la sociedad andaluza respecto de la situación de las personas mayores, con las exigencias que plantea la evolución demográfica actual y futura y con las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población de la Comunidad Autónoma” (art. 1, i). En términos semejantes e incluso con insistencia se refiere a la misma idea la ley castellano leonesa.

respecto de los mismos. No en vano, más allá de la repetitiva enumeración de derechos que en cualquier caso poseen como seres humanos, las (pocas aun) Cartas de derechos de los ancianos se decantan más por la invocación de principios y valores situando entre ellos la dignidad como eje de todo sistema de protección. Así, puede observarse en los siguientes documentos:

A) La Declaración de Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1991, mediante la cual se alienta a los Gobiernos a que introduzcan en sus programas nacionales cada vez que sea posible los principios de Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad.

B) La Carta europea de los derechos y responsabilidades de las personas mayores que necesitan cuidados y asistencia prolongadas (2010), que resulta encomiable por cuanto en la misma se parte de la dignidad que precisamente es la primera mención que en ella se desarrolla³³.

C) La ya mencionada Carta francesa de 1999 se halla a mi juicio, bien construida y merece una consideración particular en la medida en que, aun refiriéndose a los ancianos que ya se encuentran en situación de dependencia, su objetivo es el reconocimiento de la dignidad de los mismos y la preservación de sus derechos. El desarrollo de sus artículos me parece ejemplar en el sentido de que, lejos de la consabida repetición de los derechos y libertades que a todos se reconocen, lo que se enumera en dicha Carta son las realidades (y posibilidades que concurren en la vida de tales ancianos. Así, el art. I se refiere a la elección del modo de vida; el art. II a la elección del domicilio y de su entorno de modo que cuando las circunstancias impidan permanecer en el propio domicilio, puedan escoger entre instituciones o familias de acogida; el art. III se refiere a la oportunidad del mantenimiento de su vida social; el art. IV se dedica a la presencia y papel de los más próximos; el art. V se ocupa del respeto a las decisiones sobre su patrimonio y rentas; el art. VI al mantenimiento de la actividad; el art. VII vela por su libertad religiosa y las prácticas religiosas; el art. VIII vela por la autonomía y las posibilidades de medicina preventiva, en torno al adecuado uso de los medicamentos; el art. IX se ocupa del derecho a recibir cuidados de donde deriva el interés del art. X que

³³ En particular establece: Artículo 1: “derecho a la dignidad, al bienestar físico y mental, a la libertad y a la seguridad. cuando usted se hace mayor se puede ver en la situación de tener de depender de terceros, tanto si es para una ayuda o para cuidados, conserva su derecho al respecto a su dignidad como ser humano, al bienestar físico y mental, a su libertad y a su seguridad. En particular tiene el derecho:

^{1.1} Al respecto a su dignidad humana y a su bienestar, independientemente de su edad, de su raza, de su color y de su origen social, de sus medios económicos, de sus convicciones, de su sexo, de su orientación o identidad sexual y del grado de cuidados y de asistencia del que tenga necesidad.... La misma Carta (en su art. 8) refiere el valor de la dignidad al momento decisivo de la muerte.

establece la importancia de que el personal que haya de cuidar ancianos cuente con la cualificación oportuna; el art. XI desarrolla el respeto al momento final de la vida; el art. XII considera la investigación una prioridad y un deber; el art. XIII defiende el respeto al parecer del enfermo en toda decisión referida al ejercicio de sus derechos y a su protección jurídica y, por último, el art. XIV pone fin a la Carta con un llamamiento a la necesidad de difundir entre toda la población información sobre los problemas de las personas de edad dependientes, tal como ya *supra* hemos referido.

D) La Carta de derechos y deberes de la Gente Mayor de Catalunya³⁴ merece también atención por cuanto se encabeza con la reivindicación de la dignidad y a lo largo de su texto se invocan ámbitos similares a los que hemos visto destacados en el caso de la Carta francesa. Sin embargo, incluye también una exhaustiva enumeración de derechos que a mi juicio, por ser innecesaria, perturban el enfoque que ya he defendido. Lo mismo cabría decir de las dos Leyes autonómicas ya mencionadas (la 6/1999 de Castilla León y la 5/2003, de Andalucía, cuya naturaleza además habría de aportar eficacia directa y generación de derechos subjetivos). Pero no estoy segura que este modo de legislar sea el más apropiado para tratar de un problema en el que falta aún, incluso, la verdadera concienciación de su existencia.

Pues, si de una parte dan cumplimiento a la especialización normativa que estamos reivindicando, de otra, genera todo un entramado administrativo e incluye en tal norma supuestamente especial tal cantidad de elementos innecesarios por lo repetitivos que, aun siendo aparentemente normas muy completas, corren el riesgo de vaciarse en ellas el carácter de especialidad normativa por el concreto objeto a regular. De algún modo, vienen a ser leyes muy bien intencionadas en las que se sintetiza toda la regulación social aplicable a cualquier ciudadano, sin perjuicio de algunas referencias realmente aplicables a los ancianos vulnerables, que corren el riesgo de diluirse en tan amplia y reiterativa regulación.

E) Sin embargo, creo bastante acertada la consideración especial que en la Carta de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona se hace a los derechos de las personas mayores³⁵.

³⁴ <https://www.inforesidencias.com/resources/public/biblioteca/documentos/reglamentacion/catal-carta-derechos-mayores.pdf>. Publicada por RESOLUCIÓN BEF/3622/2003, de 4 de noviembre, del Departamento de Bienestar y Familia por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de 8 de octubre de 2003, por el que se establece la Carta de Derechos y Deberes de la Gente Mayor de Cataluña.

³⁵ http://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/normativa/carta_de_ciudadania_es.pdf. En pág. 15 se afirma sobre las personas mayores que tienen derecho a:

“Tener una vida digna y de calidad.

No ser discriminadas por su edad.

Vivir en su casa con las adaptaciones necesarias y recibir atención domiciliaria, si es necesario.

El Ayuntamiento facilitará apartamentos y pisos tutelados, viviendas compartidas con jóvenes y plazas en residencias cuando sea necesario.

F) Por último, entre los planes locales cabe mencionarse el de la misma Ciudad de Barcelona previsto para 2013-2016 en el que también se advierte el enfoque ya aludido que toma como punto de partida unos principios semejantes a los mencionados en la Carta francesa³⁶.

2.5. Especialización en el seno de las instituciones garantes de los derechos y protectoras de los grupos vulnerables

Sin perjuicio de la necesaria especialización y cualificación del funcionariado destinado en las Administraciones públicas en las que se prestan los servicios sociales, las instituciones en las que la Constitución hace recaer la protección y garantía de los derechos fundamentales también deberían adecuarse a las nuevas necesidades derivadas de las ya aludidas dificultades de la vida de los ancianos en la sociedad actual. Dos fundamentalmente son las garantes generales de los derechos y en las que tal especialización sin duda aportaría mayor eficacia en sus actuaciones:

A) El Ministerio Fiscal.- El artículo 124.1 de la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal, “sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos”, la misión esencial de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.

La función de tutela de los derechos fundamentales así definida tiene, como es natural, una especial trascendencia respecto de determinados grupos sociales que, por diferentes circunstancias, se hallan en situación de mayor vulnerabilidad o desprotección, como es el caso, según todo lo hasta aquí razonado, de los ancianos. Tratando de precisar, la función de tutela de los derechos especialmente protegidos de las personas mayores se proyecta en el cotidiano ejercicio de la función más conocida y común del Fiscal³⁷, es decir, al “ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda” (art. 3.4 EOMF);

Singularmente cuando tales personas aparecen como sujetos pasivos o víctimas de determinados tipos de conductas criminales que precisamente buscan obtener ventaja del desvalimiento que en ocasiones acompaña a la edad avanzada...

Las oficinas de información del Ayuntamiento atenderán a las personas mayores que padezcan acoso inmobiliario o sean víctimas de una estafa.

Disfrutar de los equipamientos lúdicos de la ciudad y de espacios administrativos adaptados.

Disfrutar de sus nietos y nietas.

El Ayuntamiento promoverá acciones que favorezcan las relaciones entre personas mayores y niños.

Expresar su opinión y participar en las decisiones que les afecten”.

³⁶http://w110.bcn.cat/QualitatDeVida/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Nova%20Documentacio/documents%20tematics/gent%20gran/sintesi_pla_gent_gran_ES%204.pdf

³⁷ Cfr. SANTOS URBANEJA, Fernando, Los derechos y garantías de las personas mayores: ámbito del Ministerio Fiscal en Estudios jurídicos, N°. 2006, 2006.

el deber de “tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley” o el de “intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación” (núms. 6 y 7 del mismo artículo 3 EOMF).

Hay un universo mucho más amplio de necesidades y problemas a los que, en el marco constitucional y legal ya delimitado, el Fiscal tiene la obligación de dar respuesta. A ese respecto, las normas que se han invocado obligan al Ministerio Público a velar por las personas en las situaciones de mayor desvalimiento. En línea con la propuesta de especialización que sostenemos, ha de recordarse por último la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/2007 de 9 de octubre. La nueva redacción del artículo 22.3 EOMF establece que “el Fiscal General del Estado podrá delegar a los Fiscales de Sala funciones relacionadas con la materia propia de su competencia... Los Fiscales de Sala podrán proponer al Fiscal General del Estado las Circulares e Instrucciones que considere necesarias, participar en la determinación de los criterios para la formación de los Fiscales especialistas y coordinar a nivel estatal la actuación de las Fiscalías, sin perjuicio de las facultades de los respectivos Fiscales Jefes de los órganos territoriales...”. Todo ello sin embargo carece de operatividad si no se amplían plantillas o se garantiza de algún modo que pueda desempeñarse en forma efectiva tal función protectora más allá de la simple enunciación que acabamos de ver pero que contrasta con el hecho de que, caso de llegar al momento de acudir a la Fiscalía, haya de esperar meses para obtener respuesta.

B) El juez ordinario ¿un juez especializado?

Naturalmente el juez, como garante de los derechos en general, es el referente constante en todo intento de regular cualquier defensa para los grupos vulnerables. Pero cabe preguntarse si resulta de utilidad una intervención “rogada” (y saturada) para salir al paso de supuestas necesidades y.... en buena medida perentorias...

Que el juez sea en última instancia la principal garantía de imparcialidad y de aplicación de la ley en defensa del más débil, es una realidad que no cabe negar. Sin embargo, hasta llegar al momento de la intervención judicial hay multitud de situaciones que requieren de medios e instituciones “intermedias”, y de intermediación, que puedan atender en forma más directa las necesidades o problemas que surgen antes de que el problema se judicialice y que, en buena medida, pueden evitar que se llegue a la fase de judicialización pudiendo aportar asistencia, consejo a las familias y, en cualquier caso, protección al miembro más desvalido. Por ello, debería potenciarse otro tipo de instituciones menos “formalizadas” y/o formalistas.

3. UN DEFENSOR DE LOS ANCIANOS

Al iniciar la presente reflexión (y ya antes ante el conocimiento directo de problemas reales de algunos ancianos) comencé por preguntarme si existía ya

un defensor del anciano como existe el del menor o de las mujeres maltratadas (respecto de los cuales, dicho sea de paso, también existe fiscalía y jurisdicción especializada); pero no he sabido encontrar sino algún caso aislado³⁸ de esta figura que creo debe potenciarse en la medida en que vamos a constituir una porción de la población³⁹ cada vez mayor y cada vez más perdida y desorientada en una sociedad cuya complejidad aumenta en cada decenio más de lo que en el pasado lo ha hecho durante todo un siglo o incluso varios⁴⁰.

³⁸ La Defensoría del Adulto Mayor es una de las nueve defensorías de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Fue creada en marzo de 1998 y vela por defender el pleno respeto a la dignidad y los Derechos Humanos de las personas adultas mayores (Procuraduría de los Derechos Humanos, 2010). Cfr. <http://wikiguate.com.gt/defensoria-del-adulto-mayor/>. En el caso argentino, existen muchas referencias a las actividades del Dr. Eugenio Semino, abogado, gerontólogo, criminólogo, y Defensor del Pueblo de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires (<http://www.laretaguardia.com.ar/2013/07/eugenio-semino-defensor-de-la-tercera.html>). Sobre California cabe también encontrar enlaces a partir de http://senioradvocacyservices.org/sites/senioradvocacyservices.org/files/upload/ombudsman_spanish_brochure_0.pdf.

Igualmente en la red se hallan referencias al Instituto del Adulto Mayor de URUGUAY <http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/inmayores-nuevo-instituto> Una completa organización a modo de red de Consejos locales para la atención a la tercera edad cabe encontrar en <http://www.eldercare.gov/Eldercare.NET/Public/Index.aspx>. En particular, existen (entre otros, también de carácter local) programas Ombudsman para mayores en Filadelfia, http://www.pcacares.org/Files/Ombudsman_Spanish.pdf

³⁹ Exposición de Motivos de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (en lo sucesivo, Ley de Dependencia) en España está experimentando “un importante crecimiento” hasta el punto de que “la población de más de 65 años (...) se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7 por ciento de la población total) a más de 6,6 millones en 2000 (16,6 por ciento)”. La tendencia, lógicamente va en aumento. Según las proyecciones de población para 2052 que ha realizado, a corto y largo plazo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la situación demográfica existente, en el próximo medio siglo, en España vivirá menos gente y será mucho más vieja. Tanto, que nuestro país perderá una décima parte de su población y que el 37% de los habitantes tendrá más de 65 años. Ahora los ancianos representan el 17% del padrón, lo que indica que en las próximas décadas se duplicará este porcentaje. Nuestra población actual, que es de 46,1 millones de habitantes, pasaría a 45 millones (un 2,5% menos) en 2022 y a 41,5 millones (un 10,2% menos) en 2052. Cfr. <http://www.ine.es/prensa/np870.pdf>.

⁴⁰ Aun tratándose de una figura local, ha de subrayarse como actuación pionera la que justamente el Ayuntamiento de Valencia adoptó con la creación de esta figura en 2003; sin embargo, debería dársele más publicidad a su existencia y actuaciones e, incluso, como puede verse en centros oficiales respecto de la protección de la mujer, insertar publicidad de tal figura, incluso, en las Residencias de ancianos. Pero el desconocimiento de tal figura resulta tan llamativo que parece querer recordarnos la desconfianza con que ve FERNANDEZ RODRIGUEZ (FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio, Defensorías del Pueblo en España: una visión `prospectiva. Cuadernos de la Catedra de Democracia y Derechos Humanos, 2014, pág. 159) este tipo de figuras cuando dependen o se ciñen a una concreta Administración, como es el caso.

3.1 Dificil fijación de los contornos del problema a la hora de enervar la actuación de garantías jurisdiccionales

Tal como ha quedado apuntado, las rápidas transformaciones sociales contribuyen a la exclusión de un colectivo que pasa de hallarse a la cabeza de las familias a representar casi un estorbo dando lugar a un sinfín de situaciones a las que debería contemplar el derecho; pero, a la vez la ductibilidad de las mismas hace más difícil el ya excepcional recurso a la fiscalía o a la justicia.

El recordatorio de los muchos derechos de que goza el anciano como toda persona no parece que resulte eficaz respecto de sus concretas vivencias cuando la vida inicia su propio “retiro”; y cuando las concretas situaciones rozan lo jurídicamente insoportable, o incluso lo delictivo, el recurso a las instituciones garantes (justicia y fiscalía) no hace sino aumentar las dificultades de la situación y ello en varios sentidos: fundamentalmente por la dilación con que se adoptan las decisiones.

Pero, además, en los casos en que los supuestos daños proceden de la propia familia del anciano ni los formalismos inherentes a tales instituciones ni el garantismo que les caracteriza (piénsese en la necesaria contradicción y permanente traslado de las supuestas quejas) facilitan el acceso ni mucho menos la obtención de respeto de quienes, sin duda, se sentirán denunciados.

3.2 La oportunidad de determinar, más que los derechos que ya poseen, las necesidades que han de ser atendidas

En este sentido, las Cartas de derechos de los mayores a que he tenido acceso y que ya he ido mencionando, creo que aciertan a enfocar las necesidades de un colectivo tan importante y tan difícil de reconducir a pautas estrictas de determinación de sus miembros y de su concreta vulnerabilidad, al situar sus necesidades como eje de los deberes de contraprestación de terceros (ya sean de carácter público o privado).

Ahora bien, los deberes de atención en su más amplio significado (desde la simple compañía, o la conversación, o el simple respeto -al que supra hemos aludido con alguna cita de diversa naturaleza-, hasta la asistencia en necesidades propias de la situación de dependencia) comprenden un amplio abanico de situaciones y de “obligados”. Desde el respeto generacional que solo puede garantizarse mediante la educación apropiada (en escuelas y en familias) hasta el cuidado, humano y humanitario, por parte de quienes profesionalmente se ocupan de los casos más avanzados de alzhéimer o enfermedades similares en los que solo la ética, la moral, o el afecto directo de los más allegados, con toda la indefinición de su respectivo ámbito, supone alguna garantía para el respeto a la dignidad del paciente.

En definitiva, el colectivo de los ancianos es un colectivo complejo por las múltiples situaciones en que podríamos distinguir sus distintas etapas vitales. Pero en todas ellas el denominador común es sin duda la necesidad de actitudes ajenas

de respeto o, dicho de otro modo, la eliminación de tantas actitudes de rechazo, olvido o indiferencia que cabe encontrar también en grados muy diferentes pero en todo caso dañosas para la autoestima de quien ya observa que las fuerzas le abandonan.

Reconducir todo ello al mundo del derecho es difícil pero es posible y debe encararse desde una consideración amplia del derecho como ordenación de una sociedad plural y respetuosa con todos los seres humanos como corresponde a este que Bobbio llamó tiempo de los derechos. Aunque el recurso al Juez o al Fiscal habrá de utilizarse solo en los casos de abandono, y en general de tantas situaciones que el ordenamiento ha ido tipificando progresivamente⁴¹.

3.3 Necesidad de residenciar la vigilancia, siquiera en forma temporal, en una institución flexible

Ante las evidentes dificultades de acudir al Juzgado o a la Fiscalía (salvo en casos de flagrante atentado a la persona mayor), deberían habilitarse instituciones que lleven a cabo las funciones de vigilancia y control de las necesidades de los ancianos sin la rigidez formalista que el ordenamiento impone a los formalmente “garantes”.

Y con tal planteamiento es obvio que ninguna institución como la del defensor del pueblo (o cualquier otra figura similar) se halla en mejor situación para llevar a cabo la vigilancia sobre el cumplimiento de tales deberes sociales respecto de los mayores. Y ello, tanto por su naturaleza y actividades desvinculadas del juego político, como por la ausencia de formalismos en el acceso a la institución y la facilidad con que cabe adoptar tal decisión de acceso frente al rigor que caracterizan otras instituciones supra mencionadas: “El Defensor del Pueblo es un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres”⁴².

⁴¹ Además de los supuestos penales ya aludidos supra, en el ámbito civil también se va modificando la doctrina. Recientemente el Tribunal Supremo español, en sents. De 3 de junio de 2014 y 30 de enero de 2015 ha considerado el maltrato psicológico como causa de desheredación de los hijos y descendientes, con lo que rectifica la doctrina tradicional que impedía proceder a la desheredación por esta causa.

⁴² A pocos días de abandonar el cargo, puedo asegurar que la figura del Defensor del Pueblo genera en los desprotegidos, una suerte de efecto taumático. Es por ello, que cuando el Defensor del Pueblo recibe una queja, por ejemplo, por vía postal, desde algún lugar distante del país, la sola respuesta de la Institución acusando recibo de la misma y poniendo en conocimiento del interesado el número de actuación que se le ha asignado, genera una nueva comunicación con el quejoso quien ya expresa su gratitud por haber sido atendida su inquietud. Aquí recuerdo, y hago mías, las expresiones formuladas por el ex Ararteko (Ombudsman) del País Vasco, don Juan San Martín Ortiz de Zárate quien sostuvo que la figura que él representaba era una “Institución con alma” (“El Ararteko”, Arteaga, Jesús María, Universidad de Deusto, Bilbao, 1994). Cfr. http://www.jorgeluismaiorano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=115

3.4 Las Defensorías como institución apropiada para recibir quejas y llevar a cabo una primera aproximación a los problemas de la ancianidad

Ciertamente, a las funciones formalmente reconocidas al Defensor del Pueblo se han ido añadiendo otras⁴³ derivadas de la simplicidad y facilidad del acceso al Defensor del pueblo; pero también de la sinergia que sus relaciones con la ciudadanía generan y, naturalmente, de la práctica de años dedicados a atender justamente a quienes más lo necesitan, en general, por ser personas o grupos “no contemplados” o, en definitiva, vulnerables. Pues “Así como los Gobiernos difunden sus obras, sus logros, el Defensor del Pueblo tiene como materia permanente de sus tareas, las asignaturas pendientes de los Gobiernos con la sociedad”⁴⁴.

Qué duda cabe, por ello, que en relación con los mayores las Defensorías pueden desempeñar un papel para el que se hallan mejor dotadas de condiciones que otras instituciones; porque en tantas ocasiones la intervención legal por parte de la fiscalía y en especial en el orden penal resulta traumática para quienes la actúan y también para aquellos frente a quienes se incoan.

Una institución como la del Defensor, de una parte, puede suavizar las actuaciones derivadas de los necesarios controles pero, de otra, cuando proceda, también puede impetrar la acción de la justicia, incluso de orden penal cuando proceda, mediante una actuación que por su carácter institucional gozará de mayor credibilidad y de menor coste humano para quienes habrían tenido que tomar la iniciativa. En este sentido me ha resultado muy llamativa la previsión del Artículo 46 de la ley andaluza 5/1999, ya referida, que se desarrolla bajo el epígrafe de “Expoliación patrimonial”:

Cuando las Administraciones Públicas tengan noticia de que el patrimonio de una persona mayor está siendo objeto de expoliación, bien por sus propios familiares o por terceros, se procederá a comunicarle de forma expresa las acciones judiciales que pueda iniciar, proporcionándole asistencia jurídica si fuera necesario, sin perjuicio del traslado de tales hechos al Ministerio Fiscal.

Ciertamente tal previsión resulta encomiable pero advertir al anciano de las acciones a ejercer no deja de suponer una situación de difícil comprensión para el

⁴³ ESCOBAR ROCA, Guillermo, Defensores del Pueblo y derechos sociales en tiempo de crisis, en PRESNO LINERA, Miguel Ángel (Coord.) Crisis Económica y Atención a las Personas y Grupos Vulnerables. Oviedo, PROCURA núm. 2, 2012, págs. 238. La idea la ha desarrollado en varias ocasiones: ESCOBAR ROCA, Guillermo, “Las Defensoras del Pueblo y la Protección de los Derechos Humanos”, obra colectiva Las Defensorías del Pueblo: un puente entre la Ciudadanía y el Estado en América Latina, GUEDAN, M. E IRAIZOZ, M. (eds.), CICODE - Universidad de Alcalá, Trama editorial, 2006, p. 121 y ss. ESCOBAR ROCA, Guillermo, Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, ob. cit, p.25. En el mismo sentido, FERNANDEZ RODRIGUEZ, op. cit. pág. 71 y 86 y ss.

⁴⁴ Cfr. http://www.jorgeluismaiorano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=115

propio interesado en muchos casos y, en todo caso, de dudosa eficacia atendida la duración de los procesos judiciales habituales. Además, las actuaciones deben llevarse a cabo con carácter preventivo para evitar tales situaciones de supuesto expolio. Y, por lo demás, cuando no se esté ante una situación tan grave como para acudir a la fiscalía o el juez, en tantas situaciones susceptibles de resolverse a través de la mediación, sin duda el Defensor puede ser un mediador excepcional entre los diversos intereses que ponen o pueden poner en riesgo el bienestar de los ancianos.

Pero, además, también es una institución adecuada para ejercer la mediación entre las instancias privadas y las públicas. En la medida en que los ancianos suelen estar a expensas (o en el entorno) de privados, ya sean residencias, la propia familia o terceros, la institución del Defensor adquiere un papel preponderante como vigilante e interlocutor que puede plantear ante otras instituciones públicas las necesidades advertidas⁴⁵.

Creo, por ello, que habida cuenta de las especiales condiciones que concurren en este colectivo (que podrá observarse que he preferido denominar de “ancianos”) progresivamente más numeroso, y sin lugar a dudas vulnerable, deberían dotarse las Defensorías de un Defensor adjunto específicamente ocupado en los asuntos de los mayores⁴⁶. La Disposición Adicional Segunda de la Ley andaluza 6/1999 se acoge a esta solución al establecer:

“Para una mejor defensa de los derechos e intereses de los mayores en Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá delegar y centralizar en uno de sus adjuntos todas las funciones que en esta materia tenga encomendadas”.

Tal idea parece también tenerse por supuesta en la Ley 5/2003 de Castilla León pues, aun cuando no se exprese abiertamente como en el caso andaluz, sí se reconoce entre las facultades de la ciudadanía mayor derivadas del derecho a la información, el deber de las Administraciones Públicas de informar sobre el procedimiento para dirigir sus quejas al Procurador del Común para la defensa y protección de sus derechos. Y asimismo se lee en el art. 10.4 que:

“Las personas mayores, para la defensa de sus derechos, podrán por sí o a través de su representante legal:

⁴⁵ Por todos, DARCY, Norberto Carlos, Las defensorías del pueblo y el mandato implícito de proteger los derechos humanos, también frente a las agresiones de los agentes privados, en ESCOBAR ROCA, Guillermo (Ed.) La protección de los Derechos Humanos por las Defensorías del Pueblo. Actas del I Congreso internacional del PRADPI. Madrid, Dyckinson, págs. 1089 ss.

⁴⁶ Ello sin perjuicio de que la institución pueda también hallar acogida en otras entidades como municipios de grandes ciudades cual es el caso, ya mencionado del Defensor del Mayor del Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, ya se apuntó supra que el establecimiento de Defensorías especializadas no siempre está bien visto y su dependencia de concretas administraciones acaba privándolas de las especiales características que han ido consolidándose en torno al típico ombudsman parlamentario (FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio, Defensorías del Pueblo..., ya cit., pág. 162). Parece por tanto, más conveniente que la sensibilización y/o especialización que hemos ido reivindicando se lleve a cabo en el seno de las propias defensorías.

... c. Presentar sus quejas ante el Procurador del Común. Para la tramitación de las mismas, el Procurador del Común podrá estar auxiliado por un Adjunto, nombrado en los términos regulados por su Ley de creación”.

3.5 Para concluir

En conclusión, la especial situación de vulnerabilidad de los ancianos exige para su protección la adopción de medidas que deberían desarrollarse bajo las siguientes directrices:

1.^a Retomar ciertos elementos educacionales que parecen totalmente abandonados (un ejemplo bien patente puede servir de prueba: obsérvese la indiferencia con que jóvenes sentados en un autobús u otros medios de transporte público ven como acceden ancianos que carecen de asiento⁴⁷).

2.^a Consideración del problema como uno de los elementos a considerar en programas políticos que lo ignoran por sistema.

3.^a Regulación a través de normativa que, en primer lugar, ha de ser especial (de la que en mi opinión debería extraerse cuanto no sea propio de la situación vulnerable de la ancianidad con el fin de evitar leyes complejas y excesivamente largas como las que aquí, de carácter autonómico, se han mencionado).

4.^a Debería existir una regulación estatal, siquiera de carácter básico, que permita un tratamiento igual en todo el territorio nacional.

5.^a Establecimiento de las instituciones más apropiadas a la complejidad del problema como escalón intermedio o previo al ejercicio de la defensa ante Fiscalía o Juzgados. Nada impediría que se sitúen en el ámbito de las Defensorías del pueblo por su hábito en el tratamiento de los grupos vulnerables; parece, incluso, que sería una decisión muy oportuna siempre que se refuercen los medios de que disponen.

6.^a De no optar por tal solución, en tanto se establezcan las instituciones especializadas, debería dotarse a las Defensorías de medios para la atención de un colectivo que requiere más de prevención y de garantía del permanente respeto a su dignidad, que del ejercicio de acciones judiciales.

BIBLIOGRAFÍA

BISTOLETTI, Edgardo José, Las defensorías del pueblo como impulsoras de la solidaridad y la cooperación sociales, en ESCOBAR ROCA, Guillermo (Ed.) La

⁴⁷ Parece más apropiado que la reserva de algunos asientos que se lleva a cabo en los medios públicos un recordatorio de la preferencia general que se debe dar a quienes necesitan sentarse, incluso como medida de seguridad.

protección de los Derechos Humanos por las Defensorías del Pueblo. Actas del I Congreso internacional del PRADPI. Madrid, Dyckinson, págs.. 439-444.

BLÁZQUEZ MARTÍN, Diego Los derechos (humanos) de las personas mayores Los derechos de las personas mayores: perspectivas sociales, jurídicas, políticas y filosóficas / coord. por Diego Blázquez Martín, 2007, págs. 17-35.

BOBBIO, Norberto, De *senectude* y otros escritos autobiográficos. Madrid, Taurus, 1996.

BORRÁS Alegría y GONZÁLEZ CAMPOS Julio D. (coordinación y estudio preliminar), “Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), 2.ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008”.

DARCY, Norberto Carlos, Las defensorías del pueblo y el mandato implícito de proteger los derechos humanos, también frente a las agresiones de los agentes privados, en ESCOBAR ROCA, Guillermo (Ed.) La protección de los Derechos Humanos por las Defensorías del Pueblo. Actas del I Congreso internacional del PRADPI. Madrid, Dyckinson, págs. 1085-1094.

DURÁN RUIZ, Fco. Javier, Derechos y principios relacionados con las personas mayores, las menores de edad y la integración de la juventud, en Reformas estatutarias y declaraciones de derechos/coord. por Francisco BALAGUER CALLEJÓN y otros. 2008.

ESCOBAR ROCA, Guillermo, Defensores del Pueblo y derechos sociales en tiempo de crisis, en PRESNO LINERA, Miguel Ángel (Coord.) Crisis Económica y Atención a las Personas y Grupos Vulnerables. Oviedo, PROCURA n.º. 2, 2012, págs. 222-254.

ESCOBAR ROCA, Guillermo, Defensorías del Pueblo de Iberoamérica. Aranzadi.2008.

FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio, Defensorías del Pueblo en España: una visión `prospectiva. *Cuadernos de la Catedra de Democracia y Derechos Humanos*, 2014.

GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen y NAVAS NAVARRO, Susana, La situación jurídica de las personas mayores en Los derechos de las personas mayores: perspectivas sociales, jurídicas, políticas y filosóficas/coord. por Diego Blázquez Martín, 2007, págs. 37-70.

HERREROS LOPEZ, Manuel. Personas mayores, en ESCOBAR ROCA, Guillermo, Derechos Sociales y Tutela Antidiscriminatoria. Pamplona, Aranzadi, 2012, págs. 1909 a 1953.

LEYRE ELIZARI URTASUN Derechos de las personas mayores en centros residenciales en Navarra: evolución y situación actual, en *Revista Jurídica de Navarra* ISSN: 0213-5795. Julio-Diciembre 2008, n.º 46. Páginas 221-259.

MARTÍNEZ MAROTO, A. Malos tratos y personas mayores. Un enfoque jurídico. *Revista Española de Geriátría y Gerontología* 2003:38 (3):

PANEQUE SOSA, Miguel (2007). “La protección de los derechos de las personas mayores en España por los defensores del pueblo”. Madrid, Portal Mayores, Informes Portal Mayores, nº 79 [Fecha de publicación: 04/02/2008]. <<http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/paneque-proteccion-01.pdf>>

SÁNCHEZ FERRIZ Remedio Derechos Sociales y Comunidades Autónomas: Los Márgenes de las Políticas Autonómicas, en *El Estado Autonómico: Integración, Solidaridad y Diversidad* (Coord. por J. M. Vidal Beltrán y M. A. García Herrera). Madrid, INAP-INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2005, págs. 477 – 516.

SÁNCHEZ FERRIZ Remedio Acotaciones sobre la Carta Valenciana de los Derechos Sociales prevista en el Estatuto de 2006, en *Revista valenciana d'estudis autonòmics*, n.º 56, 2011, págs. 52-93

SEIJAS VILLADONGAS, Esther. Los derechos de las personas mayores. Boletín Oficial del Estado, Madrid 2004.

SANTOS URBANEJA, Fernando, Los derechos y garantías de las personas mayores: ámbito del Ministerio Fiscal en *Estudios jurídicos*, n.º. 2006, 2006.